



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO
Demandado: COLFONDOS S.A.
Procedencia: JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 79
Radicado n.º: 05001-31-05-013-2020-00200-01 (O2-22-343)

En Medellín, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA2011567-2020 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir los recursos de apelación propuestos por las partes, dentro del proceso ordinario instaurado por **SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO** en contra de **COLFONDOS S.A.**, en el cual intervino de manera excluyente **SARA PALACIO ÁLVAREZ**, proceso radicado bajo el n.º 05001-31-05-013-2020-00200-01 (O2-22-343).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda,

1. ANTECEDENTES

Mediante gestora judicial, la señora **SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO** persigue el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA (q.e.p.d.), en calidad de compañera permanente, los intereses moratorios, o en su defecto, la indexación de las condenas, y las costas procesales, con fundamento en que convivió con dicho señor desde el 14 de enero de 2014 hasta el día de su fallecimiento, acaecido el 5 de octubre de 2019; y que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la AFP accionada, en calidad de compañera

permanente supérstite, misma que la denegó el 14 de enero de 2020, señalando que existía controversia entre beneficiarios, por haberse presentado a reclamar la prestación una hija supérstite mayor de edad quien desconoce la vida en común sostenida por el causante y la demandante.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 4 de agosto de 2020 (doc. 09), a la vez de disponer la citación de SARA PALACIO ÁLVAREZ como interviniente excluyente, ordenando su notificación y traslado a la parte accionada.

Una vez notificada (doc. 18), SARA PALACIO ÁLVAREZ interpuso demanda de intervención excluyente a través de vocero judicial el 20 de octubre de 2020 (doc. 20), pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA (q.e.p.d.), como única beneficiaria en calidad de hija estudiante, los intereses moratorios y/o la indexación de las condenas, y las costas procesales, con fundamento fáctico en que el causante era su padre y que se encuentra cursando el pregrado de medicina veterinaria y por ello solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ante la AFP; que el causante convivió con GLORIA ISABEL ÁLVAREZ CADAVID, madre de la interviniente, hasta que se divorciaron en el año 2009; que luego del divorcio, su padre JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA convivió con la señora LEONCIA EUGENIA DEL SOCORRO MEJÍA DE PALACIO, progenitora de éste, y con CECILIA MEJÍA RESTREPO, una tía abuela; que después de la muerte de la señora LEONCIA EUGENIA DEL SOCORRO MEJÍA DE PALACIO acaecida en el año 2015, su padre contrató a la demandante SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO para que le hiciera compañía a CECILIA MEJÍA RESTREPO; y que apenas hasta el año 2017 el causante y la demandante iniciaron una relación amorosa, pero la convivencia era interrumpida porque el causante dormía unos días donde la demandante y otros días donde CECILIA MEJÍA RESTREPO, su tía abuela.

Luego de su notificación (doc. 11), COLFONDOS S.A. contestó la demanda principal el 24 de agosto de 2020 (doc. 12) a través de poderhabiente judicial, quien se opuso a las pretensiones de la demanda, por no existir certeza del cumplimiento de los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, al tiempo de formular las excepciones de mérito que denominó: cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios, buena fe, compensación y

pago, y prescripción. *A posteriori*, dio respuesta a la demanda de intervención excluyente el 4 de diciembre de 2020 (doc. 23), oponiéndose a las pretensiones de la demanda de intervención excluyente, toda vez que mediante respuesta del 14 de enero de 2020, se le indicó a la demandante y a la interviniente excluyente que el conflicto suscitado entre ellas debe ser resuelto por la jurisdicción, y formulando las excepciones de fondo que tituló: cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, no configuración del derecho al pago de intereses moratorios, buena fe, compensación y pago, y prescripción.

1.2.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida 14 de septiembre de 2022 (docs. 59 y 60), oportunidad en la cual la cognoscente de instancia declaró que SARA PALACIO ÁLVAREZ y SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes causada por el afiliado fallecido JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA, en calidad de hija mayor estudiante y compañera permanente, respectivamente, y condenó a la AFP COLFONDOS S.A. a pagarles de manera indexada las mesadas pensionales a partir del 5 de octubre de 2019, en tanto continuaran acreditando los requisitos para ser beneficiarias de la misma, y una vez pierda el derecho alguna, acrecer la mesada de la otra; absolviendo a la AFP de las demás pretensiones incoadas por la demandante y la interviniente, a la vez de autorizar a la AFP a efectuar los respectivos descuentos en salud del retroactivo por reconocer, absteniéndose de gravar en costas procesales.

1.3 APELACIÓN

Decisión que fue recurrida oportunamente en apelación por el poderhabiente judicial de la demandante BETANCUR ROMERO, en cuyo sustento afirmó que debe reconocerse a su poderdante el 100% de la pensión desde la fecha del fallecimiento, pues no quedó acreditado en el plenario la dependencia económica de la interviniente PALACIO ÁLVAREZ para la fecha del deceso, pues por el contrario, lo que se acreditó fue que la interviniente siempre dependió económicamente de su madre, GLORIA ISABEL ÁLVAREZ CADAVID. En adición, solicita sea condenada en costas procesales la AFP y a favor de su mandante, toda vez que éstas no dependen de la buena o mala fe, sino que su imposición es objetiva.

A su turno, el vocero judicial de la interviniente excluyente PALACIO ÁLVAREZ, apeló la decisión de primera instancia, con fundamento en que los documentos como el contrato

de arrendamiento demuestran la convivencia de la pareja PALACIO BETANCUR apenas desde el año 2019, por lo que los 5 años de convivencia no tienen respaldo documental, mientras que la prueba testimonial no tiene mayor mérito de convicción.

Por último, el apoderado judicial de COLFONDOS S.A., apeló la decisión, arguyendo al efecto que la demandante confesó que llegó a la casa de la señora CECILIA MEJÍA RESTREPO desde el año 2015, cuando falleció LEONCIA EUGENIA DEL SOCORRO MEJÍA DE PALACIO, y con la finalidad de prestarle servicios a la señora MEJÍA RESTREPO, más no como compañera permanente del causante, por lo que necesariamente la convivencia como pareja entre el causante y la demandante inició a partir o luego del año 2015, de suerte que no se cumple con el requisito de 5 años de convivencia. A más de que insiste que la demandante confesó que durante la convivencia con el causante siempre vivieron en arriendo, y el único contrato de arriendo obrante en el plenario comenzó en el año 2019, con lo que tampoco se acreditan los 5 años de convivencia. En cuanto a la prueba testimonial, afirma que no se puede establecer que sean ciertas las testificales en cuanto al extremo temporal inicial de la convivencia, pues ninguno de los testigos pudo señalar la fecha en que se inició la convivencia de la pareja PALACIO BETANCUR, y lo único que atinan a decir al respecto es que la demandante llegó a vivir a la casa de CECILIA MEJÍA RESTREPO cuando falleció LEONCIA EUGENIA DEL SOCORRO MEJÍA DE PALACIO, así como se evidencia que los testigos tampoco tenían una relación cercana con el causante, a pesar de su relación de parentesco con éste, pues ni siquiera frecuentaron los inmuebles en los que tuvo lugar la convivencia de la pareja PALACIO BETANCUR.

1.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad legal para alegar de conclusión, el apoderado judicial de la demandante, arrió los alegatos de conclusión en los que expresa que era la madre de la interviniente quien sufragaba los gastos de estudio, de habitación y de alimentación de la interviniente, quien tampoco acreditó en parte alguna su relación de dependencia con el fallecido, señor Jesús Alberto Palacio, y en esa medida, incumpliendo con el requisito legal de dependencia económica, esencial para reputarse como beneficiaria. Finalmente, sostiene que el tema de costas, es un criterio objetivo que quien resulta vencido en juicio debe asumirlas, y por ende debe proferirse la respectiva condena en esos términos.

A su vez, el gestor judicial de la interviniente excluyente alegó de conclusión que los alegatos y apelaciones de los apoderados judiciales de COLFONDOS y de la señora

SARA PALACIO coincidieron totalmente, e cuanto a que no se tiene certeza de la convivencia del señor Alberto y la señora Silvia, porque la accionante manifestó que el causante “no siempre llegaba a su casa del viaje como conductor de camiones, además de que el señor Bernardo manifestó que el causante vivía en dos casas, lo que demuestra que se trató de una convivencia discontinua, a más de que no se tiene certeza del comienzo de la misma, pues hay contradicciones por ejemplo en la fecha del formulario de solicitud de la pensión presentado por la señora Silvia, no coincide con los documentos denominados “extra juicios”, ni con los testimonios rendidos.

Por su parte, el mandatario judicial de la COLFONDOS S.A. alegó de conclusión que la joven SARA PALACIO ALVAREZ y la señora CECILIA MEJÍA RESTREPO, fueron enfáticas en señalar que SILVIA MARIA BETANCUR ROMERO, no convivió con el señor JESUS ALBERTO PALACIO MEJÍA desde el año 2014, mientras que los demás testigos no saben desde cuándo y mucho menos conocieron los lugares en los cuales establecieron la convivencia, y que por parte de la joven SARA PALACIO ALVAREZ no está acreditado en el proceso el requisito de estudio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la demandante y la interviniente excluyente, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. PROBLEMA JURÍDICO:

La Sala procederá a dilucidar ¿Si SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO reúne los requisitos previstos en la Ley y desarrollados en la jurisprudencia nacional para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el señor JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA (q.e.p.d.) en calidad de compañera permanente supérstite, y si SARA PALACIO ÁLVAREZ, lo propio para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de hija mayor de edad estudiante supérstite? ¿De ser así, deberá verificarse en qué proporción y cuantía le corresponde dicha prestación, y si procede la condena en costas procesales?

2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.

El sentido del fallo de esta Corporación será **revocatorio**, toda vez que ni la demandante SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO, ni la interviniente SARA PALACIO ÁLVAREZ acreditaron los requisitos de Ley para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente e hija mayor de edad del *de cujus*, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1. Pensión de sobrevivientes

Al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, dado que el causante falleció el 5 de octubre de 2019 (doc. 01 pág. 15).

En orden a lo anterior, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez que fallezca, o del afiliado que hubiere cotizado mínimamente 50 semanas en los últimos 3 años al deceso. Punto sobre el cual no hay controversia, puesto que la *a quo* reconoció que el afiliado fallecido causó el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de sus posibles beneficiarios, sin que tal aspecto hubiere sido materia de controversia en la alzada.

Acreditado que el afiliado fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, atinente a quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera(o) permanente supérstites, siempre y cuando dicho beneficiario (a) a la fecha de fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y acredite la existencia de vida marital con el causante por espacio mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, siendo que la acreditación de tales requisitos es carga procesal de los eventuales beneficiarios, tal como lo ha reiterado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia SL169-2021, en la que sostuvo que la convivencia le incumbe probarla a quien afirma el hecho.

En este punto, resulta menester hacer la precisión de que si bien a partir de la sentencia SL1730-2020 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia adoptó una nueva postura, al adocrinar que el tiempo mínimo de convivencia de 5 años únicamente es exigible en el caso en que el causante sea pensionado, la Sala estima que tal línea de interpretación contraviene el principio constitucional de igualdad, por imponer un trato diferencial a los cónyuges y compañeros permanentes del fallecido según sea afiliado o pensionado, sin que tal discriminación se corresponda con los propósitos de pensión de sobrevivientes o con algún fin constitucional superior (SU-149 de 2021); a más de que desconoce los mandatos constitucionales de universalidad y sostenibilidad financiera del sistema pensional, al incrementar desproporcionadamente el número de reconocimientos de pensiones de sobrevivientes¹, lo que redundaría en una afectación irrazonable de los escasos recursos con que el sistema cuenta para garantizar los derechos de quienes legítimamente han accedido a una pensión (SU-149 de 2021); y que, la interpretación en cita resulta abiertamente contraria al precedente constitucional asentado desde la Sentencia SU-428 de 2016, según el cual *“el requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados por quién solo busca aprovechar el beneficio económico. (...) tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, de manera vitalicia, la compañera permanente supérstite del afiliado que tenga 30 años o más de edad, al momento del fallecimiento de este, quien deberá demostrar que hizo vida marital con el causante hasta su muerte y, por lo menos, durante los cinco años anteriores a esta”*.

Por manera que, en derredor de este ítem, la Sala acogerá el precedente constitucional, para exigir los cinco (5) años de convivencia en los casos no solo de pensionados fallecidos sino de afiliados fallecidos según lo dispone el precedente asentado desde la Sentencia SU-428 de 2016 y reiterado y precisado más recientemente en Sentencia SU-149 del 21 de mayo de 2021.

De forma que, el asunto que amerita de un análisis probatorio exhaustivo es si la señora SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO cumple con el requisito de la convivencia en calidad de compañera permanentes supérstite, para lo cual deberá establecerse si demostró que convivió ininterrumpidamente con el causante, como mínimo en el lapso comprendido entre el **6 de octubre de 2014** y el **5 de octubre de 2019**.

¹ Según el Comunicado 18 del 21 de mayo de 2021 de la Corte Constitucional, “(...) el pasivo pensional aumentaría en 461 % , según estimaciones aportadas en sede de revisión.”

Siendo necesario precisar, antes de continuar con el análisis, que lo asentido por la demandante y la interviniente únicamente constituye prueba en tanto lo manifestado le sea desfavorable a la misma parte o favorable a su contraparte, conforme la regla de valoración probatoria establecida en el numeral 2 del artículo 191 del CGP, y según a la máxima de la experiencia conforme a la cual las personas no mienten en lo que les desfavorece, pero sí podrían hacerlo en lo que les beneficia, a más de que darle valor probatorio a tal declaración de parte en beneficio de quien la emite, también supondría una abierta oposición al principio probatorio según el cual a la parte le está vedado confeccionar o construir su propia prueba.

Ello así, tenemos que no hay duda en que la demandante SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO y el causante JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA, sostuvieron una relación de compañeros permanentes que estaba vigente al momento del óbito, pues así lo confesó la interviniente excluyente SARA PALACIO ÁLVAREZ al absolver interrogatorio, según la cual para el año 2019 y hasta el momento del deceso, la pareja PALACIO BETANCUR convivió en el Municipio de Envigado (min. 52:00), lo cual encuentra estribo además en el contrato de arrendamiento aportado (doc. 01 pág. 140 a 144) y en lo depuesto en la prueba testimonial recabada.

Así pues, el punto neural de la controversia se contrae a determinar si la pareja PALACIO BETANCUR convivió ininterrumpidamente desde el 6 de octubre de 2014. En este punto, tenemos que obra prueba documental que permite establecer el extremo inicial de la convivencia, habida cuenta que si bien se aportaron unas declaraciones extrajuicio rendidas por WILLIAM DE JESÚS PALACIO MEJÍA (doc. 01 pág. 145 a 148 y 196), JUAN ALBERTO PALACIO MEJÍA (doc. 01 pág. 158 a 165, 194 y 198) y ANA MILENA RIVERA (doc. 01 pág. 150 a 156), las mismas no son pruebas documentales sino documentos declarativos emanados de terceros, allende que únicamente fueron ratificadas las declaraciones de los dos primeros mencionados, mientras que la última no fue ratificada, por lo que carece de fuerza persuasiva para estos efectos.

Luego, de acuerdo con la prueba testimonial acopiada, tenemos que frente a la fecha de inicio de la convivencia de la pareja PALACIO BETANCUR el declarante JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA, quien afirmó ser hermano del causante, si bien afirmó que la convivencia de la pareja comenzó el 15 de enero de 2014, al ser indagado por la forma en que se dio cuenta de tal situación, manifestó que lo supo porque el causante se lo dijo (min. 3:18:00), puesto que el testigo reconoció que nunca llegó a visitar la residencia de la pareja en esa época (min. 2:44:00), es decir que en este punto era un testigo de oídas.

En adición, expresó que desde que el causante se divorció en el año 2009, éste siempre vivió con su madre LEONCIA EUGENIA DEL SOCORRO MEJÍA DE PALACIO y su tía CECILIA MEJÍA RESTREPO (min. 2:30:00), que durante el año 2014 siguió amaneciendo esporádicamente en dicha casa (min. 2:50:00) para hacerles compañía, por lo que dividía su tiempo entre esa casa y la que suponía que éste compartía con la demandante, y que solo hasta el año 2015 cuando Leoncia falleció la demandante llegó a vivir a esa casa, momento a partir del cual allí residieron la demandante, el causante y la tía Cecilia (min. 2:46:30), lo que sí le constaba porque el mismo testigo es el que se ha encargado de la manutención de la tía Cecilia, y que luego de eso, la pareja PALACIO BETANCUR se fue a convivir a otra casa en el barrio El Trianón, del mismo Municipio de Envigado, debido a los inconvenientes que la pareja tuvo con la señora Cecilia, con quien era muy difícil la convivencia, siendo que en dicha casa de El Trianón sí visitó a la pareja.

A su turno, el testigo WILLIAM PALACIO MEJÍA, quien también afirmó ser hermano del causante, indicó que la convivencia de la pareja PALACIO BETANCUR inició cuando la demandante se fue a vivir con la tía Cecilia en enero de 2014 (min. 1:55:00), después de que falleció doña Leoncia, y si bien al ser inquirido por la fecha de fallecimiento de la doña Leoncia, rectificó tal afirmación, indicando que doña Leoncia falleció en el año 2015 y que la relación de la pareja PALACIO BETANCUR inició desde antes de tal fallecimiento, lo cierto es que el testigo siguió puntualizando que antes de morir doña Leoncia en el año 2015 la pareja PALACIO BETANCUR *“tenían sus encuentros, ya vivían casi que juntos”* (min. 1:59:00), que el causante presentaba a la demandante como su *“novia”* (min. 2:15:00), a tiempo de seguirse quedando algunas veces a amanecer en la casa de doña Cecilia (min. 2:21:00); de lo que se desprende que la relación de la pareja PALACIO BETANCUR antes del año 2015 consistía en una relación de noviazgo y de encuentros eventuales, más no de una relación de convivencia con vocación de permanencia.

Es más, WILLIAM PALACIO MEJÍA también recoció que cuando afirmaba que la relación de pareja comenzó en el año 2014, lo hace porque así se lo dijo el causante (min. 2:27:00), más concretamente, porque el causante le había dicho que la demandante era la mujer *“con la que estaba saliendo”* (min. 2:00:00), pero que tampoco llegó a visitar a la pareja PALACIO BETANCUR en el año 2014, puesto que apenas vino a visitarlos cuando se fueron a vivir a El Trianón (min. 2:01:00), es decir, después del año 2015, para finalmente expresar que no recordaba bien la fecha de la fecha de inicio de la convivencia de la pareja PALACIO BETANCUR porque no era un asunto personal suyo (min. 2:38:32), es decir que además de ser un testigo de oídas frente al extremo inicial de la convivencia, también reconoció que su conocimiento de oídas ni siquiera es preciso al respecto.

Ahora bien, ha de relieves la Sala, que la señora CEILIA MEJÍA RESTREPO, rindió declaración testimonial al interior del proceso, reconociendo la relación de la pareja PALACIO BETANCUR (min. 1:15:00) y que la demandante convivía con el causante al momento del deceso (min. 1:22:40), pero indicó que mientras el causante y la demandante vivieron con ella en la misma casa, la demandante ROMERO dormía en una habitación aparte (min. 1:20:00), es decir, que la demandante no compartía lecho con el causante mientras residieron en la misma casa con doña Cecilia, lo que da a entender que en tal data se produjo, cuando menos, una interrupción de la convivencia y ésta reinició cuando la demandante y el causante se fueron a vivir juntos a otra casa.

Nótese como se evidencian contradicciones en el dicho de los testigos frente a la fecha de inicio de la convivencia de la pareja PALACIO BETANCUR, visto que de una parte se afirma de oídas que la convivencia se dio desde enero de 2014, antes del fallecimiento de la señora LEONCIA EUGENIA DEL SOCORRO MEJÍA DE PALACIO, acaecido el 15 de abril de 2015, según el registro civil de defunción aportado (doc. 20 pág. 27), pero al mismo tiempo se afirma que la relación de pareja antes de ello fue de encuentros regulares y de novios, así como se expresó en igual sentido que la convivencia se dio luego del fallecimiento de doña Leoncia cuando la demandante se fue a convivir en la misma casa con doña Cecilia y el causante, al tiempo que la misma Cecilia indicó que mientras el causante y la demandante convivieron con ella en el año 2015, no compartían lecho porque tenían habitaciones separadas.

Ahora bien, tal contradicción fue decantada por la *a quo* en favor del dicho de los testigos WILLIAM y JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA, según el cual la convivencia había iniciado en enero de 2014, en razón a que los mismos eran hermanos del causante y manifestaron tener buena relación con éste, empero lo cierto es que tales circunstancias no permiten disipar el hecho de que WILLIAM se contradijo inclusive dentro de su misma declaración, afirmando inicialmente que la convivencia comenzó cuando la demandante se fue a vivir con el causante y doña Cecilia y reulando luego al afirmar que antes de eso también habían convido; ni el hecho de que la testigo CECILIA MEJÍA RESTREPO conoció directamente las circunstancias en las cuales ella misma convivió con la demandante y el causante en el año 2015, momento para el cual no compartieron lecho; y más importante aún, tampoco permite desmentir el hecho de que ambos testigos reconocieron expresamente que la convivencia en el año 2014 les consta únicamente de oídas, siendo que los testigos de oídas carecen de fuerza suasiva suficiente, al provenir su conocimiento de personas respecto a las cuales la contraparte no puede ejercer el

derecho de contradicción ni el juzgador puede verificar la ciencia o razonabilidad de su dicho, o provienen inclusive de la misma parte procesal interesada que lo trajo al proceso y, por contera, se estaría posibilitando que los sujetos procesales puedan crear su propia prueba, cuyo desmerecimiento probatorio se impone en virtud de una regla de valoración de la prueba que ha establecido la jurisprudencia nacional de manera uniforme frente al testimonio *ex auditur*, como reiteró la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del SC-076 de 2007.

De suyo que, ante la falta de convicción de la prueba testimonial, se impone considerar que si bien la señora SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO acreditó haber sido compañera permanente del causante hasta el momento del fallecimiento ocurrido el 5 de octubre de 2019, lo cierto es que no acreditó que dicha relación marital de hecho hubiere iniciado cuando menos el 6 de octubre de 2014. De consiguiente, ante el frágil valor de convicción de la prueba testimonial aportada en punto a acreditar el extremo inicial de la convivencia, como la falta de otro medio probatorio que así lo acredite, se impone concluir que no se acreditó que dicha relación marital de hecho hubiere perdurado ininterrumpidamente y como mínimo entre el 6 de octubre de 2014 y el 5 de octubre de 2019.

Pasando al análisis de los requisitos para acceder al derecho pensional por parte de la interviniente SARA PALACIO ÁLVAREZ, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la ley 797 de 2003, de cuyo texto se trasunta el siguiente aparte:

“c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;” (subrayas propias de la Sala)

De la lectura del texto legal trasunto, se desprende que los requisitos que deberá acreditar la interviniente para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes son: (i) ser hija del causante, (ii) la dependencia económica respecto del causante al momento del fallecimiento, y (iii) acreditar su condición de estudiante.

Se encuentra acreditado con suficiencia en el legajo la relación filial entre la interviniente y el causante, con el condigno registro civil de nacimiento (doc. 20 pág. 19), al tiempo que se aportaron los certificados de estudios que dan cuenta de la escolaridad de la interviniente en los términos legalmente exigidos (doc. 20 pág. 53 y doc. 32 pág. 17), por manera que el requisito que amerita un análisis más profundo es el de la dependencia económica.

De manera liminar, ha de indicarse que en lo que respecta a hijos supérstites, únicamente se presume la dependencia económica de los hijos menores de 18 años, como lo ha indicado profusamente la jurisprudencia nacional (SL1724-2018, SL4103-2017, y rad. 45264 del 27-02-2013); de suerte que, para el caso de los hijos inválidos y los hijos mayores de 18 pero menores de 25 años sí ha de acreditarse la dependencia económica. En este sentido, asuntó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia con radicación 29526 del 2 de agosto de 2007, que:

“(…) se desprende que comprende tres grupos de descendientes: a) Los hijos menores de 18 años, b) Los hijos entre 18 y 25 años que estén incapacitados para trabajar por motivo de estudios, y c) Los hijos inválidos; respecto de los cuales, únicamente se exige el requisito de la dependencia económica frente a los dos últimos contingentes; lo cual como lo pone de presente la censura, tiene su lógica, dado que en relación con los hijos menores de edad, los padres ostentan la patria potestad y por ende tienen el deber y la obligación legal de velar por su sostenimiento o manutención, lo que por sí solo los hace dependientes económicamente (…)” (subrayas propias de la Sala)

La prueba de la dependencia económica implica necesariamente demostrar que el aporte del causante era (i) cierto, y no presunto a partir de suposiciones o imperativos legales o abstractos; (ii) regular y (iii) significativo, respecto del total de ingresos del padre o madre supérstites, según lo ha reiterado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como en la reciente SL4300-2021.

Descendiendo al *sub iudice*, esta Sala revocará la sentencia de instancia, al no encontrar acreditada la dependencia económica de la interviniente excluyente respecto de su fallecido padre, por las siguientes razones:

En primer término, la testimonial rendida por CECILIA MEJÍA RESTREPO no refirió en modo alguno que la interviniente excluyente dependiera económicamente de su fallecido

padre al momento del óbito. WILLIAN PALACIO MEJÍA (min. 2:16:00) únicamente atinó a indicar en derredor de este ítem que después del divorcio entre el causante JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA y la madre de la interviniente GLORIA ISABEL ÁLVAREZ CADAVID, la relación entre padre e hija era lejana, puesto que la interviniente quedó al cuidado de su madre y la comunicación padre e hija se limitaba mayormente a las demandas económicas de la hija hacia el padre, y que si bien en los últimos días al fallecimiento hablaban más, ello se dio porque la interviniente le estuvo solicitando al causante que la ayudara económicamente para cambiar de motocicleta. Finalmente, JESÚS ALBERTO PALACIO MEJÍA respecto a este tópico (min. 2:59:00) manifestó que padre e hija hablaban poco porque la hija no le contestaba las llamadas; que a pesar de que GLORIA ISABEL ÁLVAREZ CADAVID y SARA PALACIO ÁLVAREZ le reclamaban al causante que le pagara los estudios universitarios a ésta última, el causante siempre les indicó que no tenía dinero para eso y que por ello la universidad la pagaba la mamá de la interviniente, GLORIA ISABEL ÁLVAREZ CADAVID (min. 3:10:20).

Asertos a partir de los cuales educa la Sala que el causante aportaba muy poco económicamente a la interviniente al momento del deceso, pues aunque no se pudo precisar la cuantía del aporte, sí se indicó que los mismos obedecían a gastos suntuarios de la interviniente, como los relativos a su vehículo, u obedecían a gastos eventuales que debía asumir la interviniente y por ello llamaba a su padre a pedirle dinero, de lo que se sigue que el aporte económico que el causante le brindaba a la interviniente al momento de la muerte no era regular, ni tampoco significativo respecto del total de los ingresos de la interviniente.

Conforme a todo lo expuesto, al aplicarse los criterios de la sana crítica en racional y libre persuasión, según lo dispuesto en el artículo 61 del CPT y de la SS, del cardumen probatorio recaudado se concluye que no se probó que SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO y SARA PALACIO ÁLVAREZ hubieran acreditado los requisitos legales para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente e hija mayor de edad supérstites, debiendo revocarse integralmente la sentencia de primera instancia para en su lugar, absolver a COLFONDOS de todas las pretensiones incoadas en su contra por aquellas.

2.3. COSTAS

Costas en esta instancia en a cargo de SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO y de SARA PALACIO ÁLVAREZ y a favor de COLFONDOS S.A., por haberse revocado totalmente

la sentencia de la cognoscente de instancia, según lo dispuesto por el numeral 4º del artículo 365 del CGP, fijándose las agencias en derecho de segunda instancia en la suma de **\$1.160.000** equivalente a un SMMLV, monto del cual pagará el 50% cada una de las precitadas. Por las mismas razones, las de primera instancia se revocan y correrán a cargo de SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO y de SARA PALACIO ÁLVAREZ y a favor de COLFONDOS S.A., tásense.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia materia de apelación proferida el 14 de septiembre de 2022 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, absolver a COLFONDOS S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra por la demandante SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO y por la interviniente excluyente SARA PALACIO ÁLVAREZ, según y conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO y de SARA PALACIO ÁLVAREZ y a favor de COLFONDOS S.A., fijándose las agencias en derecho de segunda instancia en la suma de **\$1.160.000, correspondiente a un SMMLV, de la cual pagará el 50% cada una de las precitadas**. Las de primera instancia se revocan y correrán a cargo de SILVIA MARÍA BETANCUR ROMERO y de SARA PALACIO ÁLVAREZ y a favor de COLFONDOS S.A., tásense.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen. Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE